
Jacqueline Peschard*

*LOS ESCENARIOS DEL PRI
en 1985*

1985 es un año de elecciones. Deberán renovarse la Cámara de Diputados Federal, diez Congresos locales, siete gobiernos estatales y 845 municipales.

En un sistema presidencialista como el nuestro, las elecciones intermedias, es decir, las que no coinciden con las presidenciales, suelen siempre atraer menos la atención tanto de los grupos políticos como del propio electorado. Significan básicamente reacomodos dentro de la élite gobernante y lucha de posiciones entre las distintas camarillas políticas en el marco de la afirmación del mando sexenal.

A pesar de que la reforma política de 1977 estimuló la actividad electoral al abrir a la oposición la cuarta parte de la Cámara de Diputados por vía de la representación proporcional que en 1983 se hizo extensiva a todas las cámaras locales, todavía en los pasados comicios federales de 1982 siguió observándose una notable diferencia en el movimiento de los partidos políticos y en la asistencia a las urnas para elegir al Presidente de la República, respecto de lo desplegado para elegir diputados federales.¹

Contrasta con esta tradición, la amplia discusión que las elecciones

* Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

¹ En las elecciones de 1982, marcadas por la concurrencia de nueve partidos políticos, los votos emitidos para elegir presidente de la República rebasaron en un millón 800 mil a los lanzados para diputados de mayoría relativa y en 735 mil a los de diputados de representación proporcional. Cfr. *Reforma Política*, Gaceta Informativa de la CFE, T. IX, 1982, pp. 139, 217, 220.

de este año han suscitado entre los estudiosos de la vida política de nuestro país, así como entre los medios masivos de comunicación. Más aún, desde hace más de un año estas relaciones han estado en la mira del gobierno y su partido.

Esta dinámica tan poco usual obedece, sin lugar a dudas, a la presencia de circunstancias novedosas en la actual coyuntura del país, que han venido a confirmar tendencias electorales que empezaron a delinearse en la misma década pasada y que anuncian modificaciones en el sentido mismo del debate electoral y en las perspectivas de la reforma política.

Al desprestigio del PRI por las formas antidemocráticas de seleccionar a sus candidatos e imponer sus triunfos, a su descenso en la captación de votos, particularmente en zonas urbanas con una fuerte población de sectores medios y en las franjas fronterizas, a la desconfianza del electorado frente a la limpieza de los comicios y a la convicción de que su voto no es factor decisivo, se han venido a sumar la crisis económica, el descrédito del gobierno por las redes de corrupción que ha sostenido y la embestida triple antigubernista del PAN, empresarios y gobierno norteamericano.

La conjugación de todos estos elementos coloca al PRI, en cuanto partido del Estado, ante el mayor reto de su historia en los últimos treinta años. El PRI se enfrenta al desafío de probar, en el terreno electoral, su vigencia no sólo como partido hegemónico, sino como aparato articulador del consenso social del Estado mexicano. No obstante, los problemas para el partido oficial no se reparten uniformemente, sino que se diferencian, configurando distintos escenarios, a partir del grado de penetración de la oposición en las diversas zonas del país, lo cual incide sobre las fases del proceso electoral, desde la selección de los candidatos, hasta el manejo de las campañas y de la votación misma.

Los límites del ritual legitimador

El régimen electoral mexicano, dominado por el partido oficial y con una oposición débil, ha hecho que las elecciones sean fundamentalmente competencia de la élite política, momentos de juego y recambios internos en los que la ciudadanía sólo ha fungido como sancionadora de las decisiones que sobre el personal político son tomadas en las altas esferas burocráticas.

Los procesos electorales han desempeñado tradicionalmente un papel de ritual legitimador del predominio del PRI, garantizado en gran me-

didada por su propia estructura corporativa incrustada al aparato estatal y las redes de control político que ha implantado. La continuidad del sufragio ha cubierto las formas legales y legítimas de la transmisión pacífica del poder, pilar esencial de nuestra prolongada estabilidad institucional.

Hoy, las elecciones no pueden reducirse al mero ritual legitimador, porque muchos de los pivotes del sistema político mexicano se han desgastado, perdiendo credibilidad y, con ello, fuerza legitimadora. La extremada concentración de facultades en el titular del Ejecutivo que otrora fuera fuente limitante de la eficacia gubernamental, ha comenzado a mostrar sus limitantes. Las presiones de los poderes económicos constriñen cada vez más su capacidad para dictar políticas con relativa autonomía y las intervenciones del gobierno norteamericano en asuntos de nuestra política interna, han mermado la defensa misma de nuestra soberanía nacional, cuya salvaguarda reside en el Estado mexicano. Además, los intereses sectorializados dentro de la alianza social del Estado se han constituido en verdaderos feudos de poder que con frecuencia obstaculizan disposiciones y afanes gubernamentales.

Por otra parte, la proclamada ideología revolucionaria ha perdido empuje no sólo porque los gobiernos no han cumplido con sus postulados esenciales de justicia social, sino que ya no es herencia exclusiva del PRI, puesto que ahora la evocan los demás partidos políticos, incluidos los de izquierda.

Asimismo, ya ni el gobierno ni su partido pueden justificar su supuesta vocación democrática al margen del terreno electoral. Si antes pudieron postergar el desarrollo político con las promesas de desarrollo económico, este argumento no se sostiene ahora fácilmente, dado el abatimiento de los niveles de ingreso y de los beneficios sociales en los últimos tres años.

En estas circunstancias, la identificación del PRI con el gobierno, que tanto le sirviera al partido oficial para obtener votos —ya que muchos mexicanos al favorecer al tricolor estaban en realidad dando un voto de confianza al régimen político—, empieza a tornarse contraproducente y a generar efectos negativos, sobre todo porque el desacuerdo con el partido del Estado puede actualmente expresarse en partidos de oposición que han incrementado su fuerza electoral.

Por todo esto, el sistema mexicano ya no puede apostar a procesos electorales que únicamente satisfagan las formas y el ritual; requiere que éstos lo doten de efectivos fondos legitimadores. En este momento las elecciones constituyen verdaderas pruebas de legitimación del Estado mexicano, no sólo interna, sino externamente. Dicho de otra manera, lo que parece estar en juego es la eficacia del sistema para mantener

vigente el caudal legitimador del sufragio como sustentador del ejercicio gubernamental.

A pesar de que estas circunstancias no son del todo nuevas, pues tiñeron a todo el decenio pasado, se han acentuado por la profundización de la crisis económica y sus efectos sociales, fundamentalmente subjetivos. Ya no estamos como en julio de 1982, en el despegue de la crisis, cuando todavía no se vislumbraban sus dimensiones y estaba viva la esperanza de la recuperación, e incluso cierta disposición al sacrificio. Estas consideraciones subjetivas se manifestaron en la contienda electoral de hace tres años, en que la ciudadanía renovó el valor del sufragio haciendo disminuir el abstencionismo, reconocido como el mayor enemigo para la legitimación del voto, del 31 por ciento seis años antes, al 25 por ciento. Para este momento, ya se han experimentado políticas que, además de golpear a las clases trabajadoras y de mermar las expectativas de mejoramiento en las condiciones de vida, han atentado contra la capacidad rectora del Estado, sin haber podido demostrar su eficacia para cumplir con las metas diseñadas. No hemos sorteado la crisis, ni siquiera hemos podido administrarla mejor para garantizar amplios márgenes de maniobra para el Estado.

En lo que concretamente se refiere al terreno electoral, un elemento inédito ha aparecido, una nueva forma de oposición agresiva y dispuesta a la violencia, encarnada por el llamado "neopanismo" y sus visibles aliados: el acecho empresarial, la ingerencia del clero político y la campaña de desprestigio del gobierno de los Estados Unidos, combinación que, como dijera Gastón García Cantú, ha conformado una transnacionalización de la oposición.²

El ascenso de la oposición panista tiene sus antecedentes cercanos en las elecciones de 1982. En esa ocasión, el partido alcanzó el mayor incremento relativo de votos, ya que aumentó el 10.79 por ciento en 1979 a 17.53 por ciento³ y en las elecciones locales de 1983, en las que además de conquistar cinco municipios capitales, logró un crecimiento notable en su porcentaje de votos en las 15 entidades en que se renovaron puestos. Comparado con las elecciones locales celebradas tres años antes, el PAN incrementó sus votos del 5.9 por ciento al

² Los candidatos panistas en Nuevo León han declarado que, como parte de su campaña, difundirán los problemas de México en el vecino país. Además, el PAN ha invitado a diplomáticos norteamericanos como testigos oculares de las elecciones en Sonora. Destacados comentaristas estadounidenses como Jack Anderson, han dado por sentado que el PAN ganará estas elecciones, augurando que, de no reconocerse el triunfo, habrá conflictos políticos serios.

³ *Reforma Política, op. cit.*, p. 129.

15.5 por ciento, destacando el caso de Chihuahua, en el que el aumento fue de 16.18 por ciento en 1980 a 41 por ciento en 1983.⁴

El ascenso del PAN en los últimos tres años ha convertido a ese partido en el canal institucional de expresión de las fisuras entre la burguesía y la burocracia política, que si bien se remontan al régimen echeverrista, se ahondaron con la nacionalización bancaria efectuada en septiembre de 1982. Desde entonces, los empresarios que consideran que el PRI ya no es garantía de representación de sus intereses, se lanzaron a una lucha campal por erigirse en sujetos políticos, decididos a conquistar el poder sin el PRI,⁵ cobijados bajo un discurso democrático, defensor del respeto a la voluntad ciudadana, identificada por ellos con el voto antipriísta. Aunque los dirigentes empresariales explotaron en varias ocasiones la organización de un partido político propio, finalmente han optado por aprovechar la experiencia y tradición electorales del PAN, así como su identificación ideológica con la corriente que dirige actualmente a Acción Nacional.

Esta alianza PAN-empresarios se ha traducido ya en una inyección de recursos para las campañas panistas y en la modificación del tono de sus consignas electorales que se han vuelto prepotentes. Los dirigentes panistas sostienen que en estas elecciones ganarán el 60 por ciento de los votos. Por su parte, la jerarquía católica ha adoptado una actitud antigubernista al oponerse a las disposiciones constitucionales que impiden su participación política, pero también al utilizar su fuerza moral para “denunciar los fraudes que se presenten en las próximas elecciones”,⁶ dando por hecho que se cometerán.

Esta embestida electoral de la derecha ha logrado alterar el panorama electoral mexicano. La hegemonía priísta se identificó con la apropiación interna de la representación de la pluralidad de la vida política nacional, justificando con ello la ausencia de competencia efectiva interpartidaria. Sin embargo, el sistema mexicano ha reivindicado siempre la forma multipartidista que hacía necesario mantener viva una oposición regular, pero leal a su carácter minoritario.

Las reformas impulsadas por los gobiernos desde 1964 buscaron siempre asegurar la supervivencia de los partidos de oposición, reservándoles espacios circunscritos donde pudieran competir entre sí. La Reforma Política de 1977 continuó con esa tendencia de avivar a la oposición mediante la incorporación al sistema electoral de nuevos

⁴Jorge Orlando Espíritu, “Evaluación de las elecciones locales durante 1983”, *Nueva Antropología*, Vol. II, No. 25, 1984, pp. 105-108.

⁵Declaración de Coindreau, expresidente de COPARMEX, *Proceso*, 27 de agosto de 1984.

⁶Declaración del obispo de Zacatecas, *La Jornada*, 8 de abril de 1985.

partidos políticos, sobre todo de izquierda, lo que permitiría al partido oficial mantener su posición de centro equilibrador. Sin renunciar a una conformación plural, para el PRI la activación de la oposición representaba, además, la posibilidad de reforzar su cohesión interna.

Por otra parte, el control que conserva el gobierno sobre las instancias electorales como la Comisión Federal Electoral que define el registro legal de los partidos, la delimitación de los distritos electorales, las fórmulas de representación proporcional, aunado a la capacidad que tiene el partido oficial de negociar alianzas tácticas con ciertos partidos de oposición como el PARM, el PPS y recientemente el PST, para repartirse posiciones como forma de cubrir las espaldas al partido oficial en los lugares donde se enfrenta a un rechazo abierto, le han dado un amplio margen de maniobra para conservar cierto equilibrio entre los partidos de oposición y frenar el eventual crecimiento excesivo de alguno de ellos. El auge panista ha venido a contrariar esos propósitos porque amenaza con romper el balance entre los partidos de oposición. A esto se debe el que Jesús Reyes Heróles expresara su convicción de la necesidad de una nueva reforma política, "la reforma de los setenta fue para la izquierda porque entonces era la izquierda la que no nos dejaba gobernar. Ahora la que no nos deja gobernar es la derecha".⁷

Por lo pronto, sin que se vislumbre la puesta en marcha de una nueva reforma política, el PRI y el gobierno deben ganar las elecciones y convencer de que las ganan, para desvanecer el espectro del bipartidismo. Sin embargo, este imperativo no ha derivado en la formulación de una novedosa estrategia electoral que implicaría la revitalización de los planteamientos ideológicos del partido del Estado y la modificación de sus procedimientos electorales.

El PRI ha reconocido dificultades para triunfar en las elecciones. Hace tres años los líderes priístas sostenían que no harían concesiones gratuitas a la oposición, mientras que en la actualidad advierten que ser candidato priísta no es sinónimo de victoria. No obstante, el PRI no ha abandonado su discurso triunfalista y aunque el triunfalismo ya no le es privativo porque se lo han apropiado partidos de derecha e izquierda, resulta cada vez menos convincente para un electorado escéptico y lo que es peor, indiferente.

El PRI sigue atado a sus viejas prácticas, confiado más en el tamaño de su aparato y sus recursos y en la despolitización de la sociedad que en su fuerza ideológica y su capacidad movilizadora.

Quizá lo más grave de esta situación es que el partido oficial ha perdi-

⁷Comentario citado por Héctor Aguilar Camín, *La Jornada*, 20 de marzo de 1985.

do credibilidad entre sus propios militantes, porque la carrera partidaria se ha desvirtuado, perdiendo terreno frente a la burocrática y porque el PRI ha demostrado su incapacidad para democratizar su vida interna y hacer más atractivo el compromiso partidario, a pesar de que se ha esforzado por dar muestras de su voluntad de cambio. Los seis meses del año pasado que dedicó a la organización de su XII Asamblea Nacional, efectuada en agosto de 1984 y que tenía el propósito expreso de recoger los puntos de vista de los distintos grupos y corrientes dentro del PRI sobre cómo modificarlo para responder mejor a las expectativas de sus integrantes, cumplir mejor con los afanes moralizadores del gobierno delamadradiano y llegar fortalecido a las elecciones de este año, estuvo lejos de cumplir sus cometidos.

A pesar del gran esfuerzo desplegado, de las 49 mil ponencias presentadas y las 125 mil propuestas concretas, sólo se lograron compromisos a nivel declaratorio sobre la necesidad de impulsar mecanismos democráticos para la selección de los candidatos a puestos de elección popular, que aseguran un efectivo reconocimiento a la militancia disciplinada y un claro compromiso de los funcionarios públicos con el partido oficial.

Quedó claro, entonces, la cuota de poder de los diferentes grupos priístas, pero sobre todo su resistencia a cambios que atentaran eventualmente contra los intereses corporativos dentro del PRI. Tampoco quedaron dudas sobre la persistencia de su estructura jerarquizada y la permanencia de una extrema centralización de sus funciones, es decir, no quedó duda sobre su inmovilismo. No obstante, en dicha Asamblea se hicieron patentes contradicciones en la concepción misma del partido, ya que se debatió si su naturaleza multiclasiista estaba o no reñida con la integración de los empresarios como cuarto sector del PRI.

Negadas o no, en el mejor de los casos, postergadas las posibilidades de una reforma interna, el Revolucionario Institucional llegó a estas elecciones igual que hace tres años, pero con muchos más escollos a su liderazgo hegemónico.

Frente al evidente anquilosamiento del PRI, el gobierno ha desarrollado una serie de acciones para responder al reto electoral. Aprovechando los márgenes de discrecionalidad que le confiere la LOPPE, a través del control de la CFE, se otorgó registro definitivo al PARM con el fin de utilizar su base electoral localizada en Tamaulipas, pero particularmente de conservar un cuadro de partidos aliados al oficial que después de las elecciones de 1982 en que el PARM perdiera su registro al alcanzar sólo el 1.36 por ciento de los votos, había quedado reducido al PPS. En este mismo sentido, y paralelamente, el PRI logró que el

PST, que desde sus orígenes ha comulgado con la posición de defensa nacionalista que reclaman el gobierno y su partido, acordara presentar candidatos a diputados comunes, rechazando hacerlo con partidos de izquierda que, según Aguilar Talamantes, “no han entendido la lucha que se está librando entre la nación y el imperialismo y por ello atacan irracionalmente las políticas del presidente”.⁸

Por otro lado, aprovechando los buenos oficios del PST, quien lanzara la propuesta dentro de la CFE, se incrementó el número de circunscripciones plurinominales de cuatro a cinco, que es el máximo previsto por la ley electoral y se fijó la fórmula de representación de primera proporcionalidad que permitirá que la distribución de las curules de representación proporcional favorezcan a los partidos de oposición con baja votación,⁹ con la clara intención de contrarrestar la fuerza panista, argumento que le valió el visto bueno de partidos como el PSUM.

A pesar de que no se esperan sonoras derrotas para el PRI, tampoco se prevé una mayor participación del electorado. El Registro Nacional de Electores ha calculado que aumentará el abstencionismo al 35 por ciento, de donde se desprende que la efervescencia electoral no se corresponde con un mayor interés de la ciudadanía por ejercer su derecho de voto.

Si en los inicios de la década de los setenta, el gran enemigo para la legitimación por vía electoral era el abstencionismo, hoy, con todo y reforma política y la agresividad neopanista, las elecciones siguen sin remover a numerosos núcleos de la población.

A fin de ver cómo dentro de este panorama general se presentan variados escenarios para el partido oficial, analizaremos los criterios seguidos por el PRI en la fase de selección de sus candidatos, a fin de extraer algunas consideraciones sobre el peso relativo de las distintas situaciones.

Nuevos patrones de selección, viejos procedimientos

El marcado predominio priísta en nuestro régimen electoral, ha hecho hasta el momento que la fase más significativa del proceso electoral, y por tanto, el momento de verdadera lucha política, sea el de la selección de los candidatos oficiales a puestos de elección popular. Ahí se mide la incidencia de las distintas fuerzas políticas dentro del partido y el go-

⁸ *La Jornada*, 8 de marzo de 1985.

⁹ Javier Patiño, *Análisis de la Reforma Política*, UNAM, 1980, p. 104.

bierno. Desde la reforma política el comportamiento del electorado y las cifras de las votaciones han cobrado relevancia, sin embargo, el tiempo de la selección sigue ocupando un lugar de primer orden, pero ya no sólo porque en él se defina el reparto de puestos entre camarillas políticas, sino porque ahora se distribuyen también distritos más o menos problemáticos para el PRI. Dicho de otra manera, en el proceso de selección ya se toma en cuenta además del grupo político que impulsa una candidatura, la eventual respuesta del electorado, considerando la tendencia de su comportamiento, así como la presencia diferenciada de los partidos de oposición. En este orden de cosas, las fases del proceso electoral conservan el mismo peso relativo.

Dado que los mecanismos para decidir sobre los candidatos siguen manteniéndose cerrados a la luz pública y apartados de las mismas filas intermedias y bajas del partido, sólo se pueden inferir los criterios que guían dichas decisiones a partir de los movimientos que logran filtrarse en los medios de comunicación y ya, *a posteriori*, por el destape de los afortunados.

A pesar de que las situaciones para el PRI no son iguales en las diferentes zonas y ni siquiera dentro de un mismo distrito electoral, la selección de los candidatos parece haber estado regida por un principio claro de utilidad política desde el punto de vista de alimentar las posibilidades de triunfo, pero también de aminorar las fricciones entre los distintos intereses priístas. Esta necesidad llevó a subordinar, que no a eliminar, criterios crudos de amistad y cercanía al Jefe del Ejecutivo que en el sexenio pasado fueran tan socorridos. No obstante, se perpetuó la forma centralista tradicional del proceso.

Tomando en consideración la selección de los candidatos priístas de los estados donde hay cambio de gubernatura, pueden distinguirse tres situaciones o escenarios particulares para el PRI.

En los estados norteros de Sonora y Nuevo León, donde la oposición "neopanista" ha extendido su versión ideologizada de la crisis económica, según la cual PRI + corrupción gubernamental = crisis, el partido oficial ha centrado su estrategia en el combate a la amenaza del bipartidismo. Caracterizan a dichos estados el enfrentamiento de los grupos empresariales con el Estado en el campo de la dirección política, así como la clara relación del PAN con dichos grupos.¹⁰

¹⁰Fernando Canales Clariond, candidato panista al gobierno de Nuevo León fue dirigente de la CANACO del estado; el presidente municipal panista de San Luis Río Colorado, Sonora, es asesor de grandes comercios con capital extranjero; Amaya, representante del PAN en Sonora, fue dirigente empresarial y el candidato panista al municipio de Ciudad Obregón, fue vicepresidente de COPARMEX. Cfr. *Proceso*, 3 de diciembre de 1984.

Los movimientos populares, obrero y campesino, tienen muy poca fuerza y las clases medias han ido conformando su visión del mundo y sus expectativas de acuerdo con las de los grupos económicos dominantes de sus regiones. En otros términos, la amenaza bipartidista en estos estados está determinada por tres fenómenos: la marginación política de la clase trabajadora, la ofensiva política empresarial y la clientela panista en amplios sectores medios.

En lo que se refiere al comportamiento electoral, las correlaciones existentes entre los niveles de marginalidad y los grados de participación, colocan a ambos estados en el índice de marginación media baja con el que se corresponde un alto nivel de abstencionismo promedio del 30.29 por ciento,¹¹ ratificándose la tendencia a una relajación inversamente proporcional entre nivel de desarrollo y porcentaje de sufragios. Sin embargo, entre 1976 y 1982, el abstencionismo en estos estados bajó, aunque de manera más marcada en Nuevo León. Ver Cuadro 1. Aunado a este fenómeno, se presenta una clara caída para el PRI y un ascenso del PAN en ambos estados, pero acentuado en el caso de Sonora, lo cual puede explicarse por las fisuras en la relación de la burguesía agraria sonorense con el gobierno mexicano, desde el decreto que dictara Echeverría para expropiar latifundios del Yaqui y el Mayo en el último año de su gestión, que estimuló el antipriísmo, pero también por los enfrentamientos entre los grupos políticos del estado que avivaron el descontento entre priístas, desde la imposición, desde el centro, de la gubernatura de Armando Briebrieh en contra de los deseos de los grupos locales que reclamaban la reivindicación de la gente del estado, a quienes llaman "los de acá".¹²

Ante este panorama, el PRI dio a conocer a sus candidatos a gobernadores una vez que el PAN había postulado a los suyos y favoreciendo a dos personas cuyo rasgo en común es que fueran aceptables a los grupos empresariales. Destaca el caso de Jorge Treviño, candidato priísta al gobierno de Nuevo León, quien afirmó que los empresarios sí tienen cabida en el PRI, por lo que "podrán seguir trabajando en armonía la iniciativa privada y el gobierno"¹³ y que ha recibido la aceptación del sector empresarial de Monterrey. La selección de Rodolfo Félix Valdés como candidato al gobierno de Sonora privilegió la capacidad de negociación con el fin de atraer a los empresarios de

¹¹ Carlos Pereyra, "La desigualdad política", en Cordera, R., y Tello, G., *La desigualdad en México*, México, Siglo XXI, 1984, p. 118.

¹² El viejo cacique y exgobernador, Faustino Félix Serna, encabezó dicho rechazo contra el poder central y hoy ha dicho que apoyará a Adalberto Rosas, candidato panista al gobierno sonorense. Cfr. *Proceso*, 3 de diciembre de 1984.

¹³ Cfr. *La Jornada*, 4 de marzo de 1985.

CUADRO 1

		abstencionismo %	votación del PRI %	votación del PAN %
Nuevo León	1976	47.93	85.10	17.81
	1982	23.80	71.95	24.42
Sonora	1976	23.09	96.33	2.32
	1982	21.61	74.10	30.27

Fuente: *Reforma Política*, Gaceta Informativa de la CFE, Tomo IX, 1982, pp. 114-120.¹⁴

nuevo al manto priísta mediante promesas de auspicios para la burguesía agraria. Aunque Félix Valdés carece del reclamado arraigo en el estado, ello mismo significó la ausencia de compromisos previos con los grupos locales, por lo que se espera que resulte un árbitro eficaz, apoyado fuertemente desde el centro.

Un segundo caso lo conforman los estados del centro, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, donde hay una presencia importante de la oposición panista combinada con la del PDM, cuya fuerza es mayor en Guanajuato y menor en Querétaro. A pesar de que dentro de los cuadros que relacionan índices de marginación con niveles de participación, los dos primeros encajan en la categoría de alta marginalidad que se corresponde con un nivel de abstencionismo del 27.6 por ciento, mientras que Querétaro se localiza en el índice de muy alta marginalidad y un porcentaje de abstencionismo del 26.29 por ciento,¹⁵ entre 1976 y 1982, la evasión del voto se incrementó en los dos primeros estados, aunque mucho mayormente en Guanajuato, pero disminuyó en Querétaro. Pero esta fluctuación en la participación corrió paralela a una caída en los votos priístas y una elevación en los panistas (Cuadro 2), de donde se puede ver que la caída de la asistencia a las urnas se traduce en un ascenso de la lucha interpartidista. Las diferencias en el comportamiento electoral en estos estados se explican, por una parte, por su composición económica y por el tipo de conflictos políticos que han enfrentado a los grupos priístas en las tres entidades. Mientras en Guanajuato la presencia del grupo industrial de León se ha

¹⁴ Las cifras del cuadro 1 corresponden a los votos para elegir presidente de la República, con excepción de las del PAN, que provienen de los sufragios para diputados, ya que en 1976 ese partido no postuló candidato a la Presidencia.

¹⁵ Pereyra, *ibidem*.

CUADRO 2

		abstencionismo %	votación del PRI %	votación del PAN %
Guanajuato	1976	23.40	92.79	0.37
	1982	36.43	65.05	21.18
San Luis Potosí	1976	25.45	94.51	3.93
	1982	31.33	82.40	9.96
Querétaro	1976	29.97	94.42	6.57
	1982	24.21	74.96	16.14

Fuente: Reforma Política, Gaceta Informativa de la CFE, Tomo IX, 1982 pp. 106-118 y 119.¹⁶

traducido en una afluencia de votos a favor del PAN, que en 1982 alcanzó en los tres distritos de la ciudad un promedio de 41 por ciento de votos, en el caso de San Luis Potosí, la oposición panista tiene un sostén de sectores medios urbanos y rurales, centrados en la movilización “navista”, encabezada claramente por el alcalde con licencia del municipio de San Luis Potosí, Salvador Nava Martínez. En Querétaro, el ascenso del PAN se basa en el favor de los sectores medios y como expresión antipriísta en rechazo a la gestión de Rafael Camacho Guzmán, acusado por miembros de su propio partido de insolvencia moral.

Los sucesos políticos que se sucedieron previos a la selección de los candidatos a gobernadores de estos estados, explican por qué y a pesar de la penetración panista, a diferencia de los estados del norte, el objetivo de la selección no estuvo orientado por la búsqueda del favor empresarial. En el caso de Guanajuato, la crisis política de junio de 1984 que llevara a la renuncia del gobernador Enrique Velasco Ibarra, evidenció que durante su gestión había buscado la alianza con el Grupo León, conformado por los empresarios fuertes de la entidad, debido a que su arribo al gobierno había estado apoyado por el centro y no por los grupos políticos locales. En todo caso, en Guanajuato se vio que para los empresarios locales está viva la opción del PRI como representante de sus intereses. Lo más grave entonces estaba en las fricciones que la renuncia del gobernador provocara entre los grupos políticos priístas. La designación de Rafael Corrales Ayala, hombre de larga trayectoria en el PRI y la administración pública, persiguió reforzar la

¹⁶ Las cifras están tomadas de la misma manera que en el caso de Sonora y Nuevo León.

cohesión de la clase política en Guanajuato. En Guanajuato, más que el problema del arraigo en la entidad, se presentaba el de la falta de unidad priísta. Corrales Ayala es una figura conocida en el estado y ha logrado atraer a sus filas de simpatizantes al contingente del presidente municipal de San José Iturbide, expriísta que alcanzó la alcaldía cobijado por grupos independientes porque el PRI le negó la postulación.

San Luis Potosí se caracteriza por ser tierra de caciquismo que se remonta a la época misma de la Revolución, con sus más claros exponentes impulsados por el control político del estado, Cedillo, Gonzalo N. Santos y, en últimas fechas, por el gobernador saliente, Carlos Jonguitud, presidente vitalicio de Vanguardia Revolucionaria y verdadero cacique del magisterio. El único movimiento de oposición que tuvo una enorme fuerza movilizadora ha sido el navismo, surgido, en los cincuenta, de grupos intelectuales contrarios a Gonzalo N. Santos.

Hace tres años renació el navismo apoyado por una alianza concertada entre el PAN y el PDM, pero en este momento el navismo se halla dividido porque no existe un acuerdo sobre si la lucha contra el poder constituido debe hacerse por la vía de partidos políticos o fuera de éstos, a través del Frente Cívico Potosino.

El problema de la selección del candidato priísta radicaba, más que en la fuerza de la oposición, en la necesidad de frenar el continuismo del caciquismo de Jonguitud, lo que explica la postulación de Florencio Salazar, hombre de larga actividad en el partido oficial, cuya línea se ubica en la más pura ortodoxia priísta, que ha realizado tareas partidistas en varias entidades del país, además de haber aspirado a la gubernatura hace doce años.

En el caso de Querétaro, el candidato postulado por el PRI, Mariano Palacios Alcocer, se destaca por su juventud y popularidad, que contrastan con el gobernador saliente. Palacios Alcocer proviene del Senado de la República, tiene experiencia en puestos de elección, además de estar ligado a los grupos universitarios profesionales desde que fuera rector de la Universidad del estado. La apuesta del PRI en Querétaro parece centrada en la moralización de la imagen del gobernador, para borrar el desprestigio del gobernador saliente.

Un tercer grupo lo conforman los estados de Colima y Campeche, donde los candidatos priístas a sus gobiernos fueron postulados en forma conjunta, donde existe un entendimiento básico entre los grupos económicos locales y sus respectivos gobiernos y, finalmente, donde la oposición no representa una amenaza al partido oficial. Dentro de la clasificación que ha hecho el PRI en función del grado de riesgo al que se enfrenta a estas elecciones, Campeche y Colima se localizan dentro

del grupo de cuatro estados considerados como seguros, que abarca también Hidalgo y Tlaxcala.

A pesar de que estos dos estados se hallan en distintos niveles dentro del cuadro de índices de marginación y niveles de participación, ya que Campeche se encuentra en el nivel alto y Colima en el medio, y sus porcentajes de abstencionismo fluctúan entre el 27.6 y el 21 por ciento,¹⁷ tienen la particularidad de estar divididos en sólo dos distritos electorales. Entre 1976 y 1982, el abstencionismo se abatió radicalmente en Colima, pero se incrementó considerablemente en Campeche.

En este cuadro diferenciado de participación, el PRI perdió terreno en ambos y el PAN se benefició de ese hecho, pero sin modificar la situación de monopolio partidario del partido oficial. Ver Cuadro 3.

CUADRO 3

		abstencionismo %	votación del PRI %	votación del PAN %
Campeche	1976	2.57	99.42	0.10
	1982	26.20	83.07	2.89
Colima	1976	56.21	95.77	3.79
	1982	9.84	88.40	6.55

Fuente: *Reforma Política*, Gaceta Informativa de la CFE. Tomo IX, 1982, pp. 99, 101.¹⁸

Desde luego que el abatimiento del abstencionismo y la menor pérdida para el PRI en cantidad de votos en 1982 en Colima respecto de los otros estados, se debe a que el candidato presidencial en ese año, Miguel de la Madrid, proviene de dicha entidad. En todo caso, la implantación de la oposición en Campeche y Colima es poco significativa, por lo que el PRI no ha dado muestras de preocupación.

En los dos estados, la selección de los candidatos se propuso el equilibrio entre las distintas corrientes dentro del PRI, a través del respeto al proclamado arraigo en la entidad, lo cual implica que los escogidos cuentan con equipos de trabajo dentro de las propias entidades.

En el caso de Campeche, Abelardo Carrillo Zavala, ha sido líder, por 16 años, de la CTM estatal, el sector priísta más fuerte en la entidad y que ha dado muestras de un control político eficaz de los obreros, ya que en los últimos tres años no ha habido huelgas en la localidad, por lo que se ufanan de haber logrado una buena armonía entre empre-

¹⁷Pereyra, *ibidem*.

¹⁸Las cifras están tomadas de la misma manera que en los casos precedentes.

sarios y obreros. Esto explica que Carrillo Zavala esté apoyado también por los empresarios campechanos, agrupados en la Alianza Cívica de Campeche. Por otra parte, cuenta con una larga carrera partidaria y ha sido tres veces diputado federal, además de estar apoyado por el grupo político más fuerte de la entidad, el de Carlos Sansores Pérez.¹⁹

En Colima, enclave de la familia del Presidente Miguel de la Madrid, la lucha por la postulación se dio en torno a dos consideraciones: la reivindicación del arraigo y la presión de los grupos económicos. El candidato postulado por el PRI, Elías Zamora Verduzco, alcalde de Manzanillo, apoyado por un ala de la familia presidencial, fue un golpe al Grupo Tecomán, que controla una parte considerable de las empresas turísticas del estado y que impulsó la candidatura de Ahumada Padilla. Zamora Verduzco, además de recoger la demanda del arraigo, fue el candidato de la conciliación familiar.

Estas consideraciones sobre la forma de selección de los candidatos priístas a los gobiernos de los siete estados en los que habrá relevo este año, a pesar de que no permiten prever el resultado mismo de las elecciones, si nos ofrece un panorama de las variadas tareas que tiene el PRI para frenar el descontento latente de la ciudadanía respecto al gobierno de nuestro país.

Por otra parte, estos criterios diferenciados de selección denotan un cambio en la situación de la oposición en México, ya que su lucha, que se concentrara particularmente en los niveles locales de elección, se ha trasladado, específicamente en esta ocasión, al terreno estatal y federal.

Conclusiones

A pesar del amplio debate en torno a las elecciones en 1985, éstas siguen siendo asunto básicamente de las élites políticas. El pueblo continúa al margen de las decisiones y movimientos electorales. Por ello, este debate y la efervescencia electoral han desviado la atención y minimizado el fenómeno del abstencionismo que, hoy por hoy, constituye el gran termómetro de la credibilidad del sistema mexicano.

La oposición panista, por mencionar a la más poderosa, ha demostrado carecer de línea institucional y de rigor ideológico, ya que de una posición virulenta, de invitación a la violencia electoral en los comienzos del proceso, pasó, a partir de su Asamblea Nacional el 23 de febrero último, a una actitud de franca moderación y de reconciliación con

¹⁹Cfr. *Proceso*, 25 de febrero de 1985.

las corrientes tradicionales del panismo. Todo el vigor con el que inició los preparativos de los comicios de este año ha empezado a desvanecerse una vez concluído el momento de selección de los candidatos del partido oficial. Aunque seguramente el PAN alcanzará aumentos en su número de votos, ratificando la tendencia que se viene expresando en los últimos seis años, cabe pensar que hubo entre sus primeros propósitos el de incidir sobre la designación priísta.

En cuanto al PRI, se encuentra preso entre su apego a la tradición triunfalista, aferrado al ritual electoral y con una clara preocupación por no perder y sobre todo por impedir protestas violentas que arruinen su fiesta electoral. O, como dijera Francisco Martínez de la Vega, el PRI está obsesionado por tranquilizar a la derecha panista envalentada por las renovadas alianzas con los empresarios y la embajada norteamericana y poco se preocupa por lo que debería ser su motivación central, el triunfo de programas de acción nacionalistas y populares.